

Cuando este número de **Urbana** esté en circulación, en nuestro país se habrá inaugurado el nuevo gobierno resultante de las elecciones de diciembre de 1988. Después de seis lustros ininterrumpidos de vida democrática éste debería ser un hecho sin excesiva importancia; no obstante, la persistencia e incluso el arreciamiento de la crisis que desde hace varios años se abate sobre nuestra sociedad plantea en la actual coyuntura interrogantes y expectativas que no pueden ser pasadas en silencio.

Aunque el debate electoral estuvo en general lejos de ser de los más constructivos y estimulantes, lo cierto es que por debajo de él se mantuvo latente el tema del agotamiento del modelo de desarrollo hasta ahora vigente y de las opciones que en consecuencia se plantean. Pero uno de los riesgos implícitos en la forma en que se llevó ese debate consiste justamente en que, sobre todo en el discurso de los dos candidatos que polarizaron más del 90 por ciento de los votos, tal tema apenas fue rozado en el plano retórico, mientras que en lo sustutivo actuaban como si nada o casi nada hubiera cambiado, alimentando un abanico de expectativas cuya satisfacción es más que improbable a la luz de los datos que tercamente arroja la realidad.

Cuando hace cinco años se iniciaba el gobierno hoy saliente, no era completamente descabellado imaginar que los precios del petróleo podrían mantenerse al menos en niveles que no asfixiaran totalmente a un Estado que por decenios había asumido con relativo éxito la responsabilidad principal por el mantenimiento de la dinámica socio-económica. Pero el gobierno que ahora da sus primeros pasos se encuentra no sólo con que las arcas de la nación están vacías, sino que incluso una buena parte de la riqueza futura ya ha sido comprometida; con que el ingreso real *per cápita* se ha venido deteriorando hasta hundirse a los niveles de hace veinte años; con que el 85 por ciento de las

familias se encuentra en condiciones tales que les resulta imposible acceder al mercado formal de vivienda sin el auxilio de algún grado de subsidio.

La escasa discusión real sobre los dilemas que plantea esta situación y el hecho inocultable de que el modelo populista de base rentista hasta ahora vigente ha agotado sus espacios de maniobra hicieron evidente, ya en la misma campaña electoral, que el nuevo gobierno —independientemente de sus referentes ideológicos— podía terminar dejándose encantar por las sirenas del neoliberalismo, no sólo porque es esa la dirección en que empujan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino también porque, en fin de cuentas, aparece como la alternativa del menor esfuerzo al proponer que el ajuste se realice a expensas de los sectores económica, social y políticamente más débiles. Un antícpo de esta posibilidad ya la había dado el Ministro del Desarrollo Urbano del gobierno saliente, quien, sin rubor y sin que le valiera siquiera un tirón de orejas, estrenó en la última Convención de la Vivienda organizada por la Cámara de la Construcción una novísima teoría según la cual, al ser éste un país donde nadie vive a la intemperie, hablar de déficit habitacional sería tanto como alucinar con mitos. Pero también los esfuerzos de enmascaramiento ideológico de la antigua “marginalidad”, ahora “sector informal de la economía”, procurando presentarla como una suerte de empresariado *in nuce*, y la propensión de las estadísticas oficiales a no diferenciar entre subempleo y empleo pleno son indicadores del avance de las ideas neoliberales.

Al momento de escribir este editorial resultan claras las políticas del nuevo gobierno dirigidas a enfrentar los grandes desequilibrios macroeconómicos en materia de balanza de pagos, déficit fiscal y desajustes financieros. Ellas se sintetizan en la unificación flotante del tipo de cambio, la colocación de las tasas de interés por encima de las de inflación y una elevación (estimada en promedio en el 100 por ciento) de las tarifas de los servicios públicos y los precios de los combustibles. A ello se suma la liberación generalizada de los precios de bienes y servicios y la privatización de parte de las empresas públicas. Todo apoyado en la confianza de obtener conspicuos recursos externos para 1989 (unos 5.000 millones de dólares) provenientes en su mayoría del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sus autores no ocultan —y en verdad no podrían hacerlo— que lo propuesto es un clásico tratamiento de shock, que se traducirá en una inflación de costos estimada en el orden del 40 por ciento, mayor desempleo y crecimiento nulo de la economía para este año. Lo justifican por el muy grave estado en que reciben el país, pero pronostican crecimiento acelerado y baja inflación a partir de 1990.

Prácticamente ningún sector social desconoce la necesidad de adoptar medidas

radicales y dolorosas para corregir las malformaciones causadas por diez años de dificultades en los mercados externos y de un manejo de la política económica que no puede menos que calificarse de irresponsable. Sin embargo, las políticas propuestas han levantado críticas importantes. Por una parte se sostiene que todavía la economía venezolana tenía márgenes como para permitir la adopción de una trayectoria de ajuste más gradual, que facilitara la adaptación de los agentes y actividades económicas a la nueva situación. Por otra se argumenta que dichas políticas están sesgadas a favor de los sectores tradicionalmente dominantes, en particular del sector financiero. Además se observa que el "paquete social", dirigido a amortiguar los impactos sobre los estratos más débiles, es inadecuado y en todo caso parece insuficientemente estudiado. Por último se señala que la concertación, enfatizada por sus propios autores como indispensable para asegurar el éxito, se ha limitado al simple gesto de informar anticipadamente a los distintos agentes sociales y económicos de las medidas ya decididas aunque no formalmente decretadas. El resultado ha sido que ya una institución tan importante como la Confederación de Trabajadores y los principales partidos de oposición han manifestado, a veces enfáticamente, su desacuerdo.

Debe reconocerse pues que, en materia macroeconómica, las cartas ya han sido echadas. Sin embargo, en lo que se refiere específicamente a los aspectos territoriales del desarrollo, quedan por delante importantes batallas por librarse, siendo quizás la más significativa la relativa a la descentralización del Estado.

Durante el último quinquenio la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) desarrolló una intensa actividad que la llevó a formular un importante conjunto de proposiciones para, de acuerdo a su propia expresión, la modernización y democratización de la sociedad venezolana. De entre ellas destaca la referida a la descentralización del Estado, que no sólo es de especial significación para quienes nos ocupamos de las cuestiones territoriales sino que la propia COPRE la califica como tal vez la más importante entre todas las reformas que ha presentado.

Al menos en el plano del discurso tanto el nuevo Presidente como los demás ex-candidatos presidenciales y los respectivos partidos se han comprometido para llevar a la práctica tales reformas, mientras que ya el Congreso de la República ha aprobado dos que son fundamentales: la referida a la elección directa de gobernadores de estado y la que crea la figura del Alcalde —también de elección directa— como instancia ejecutiva del poder municipal; ambas elecciones, además, están pautadas para este mismo año de 1989. Esto quiere decir que ya han sido colocadas dos de las piedras fundamentales de la descentralización.

Pero es necesario advertir que la descentralización no puede ser vista como un

fin en sí misma y menos como una panacea; que ella no es más que un instrumento para alcanzar fines que pueden ser muy diversos entre sí, incluso eventualmente contrapuestos. A este respecto es importante insistir en que las reformas políticas son inseparables de las económicas y que, sobre todo en materia territorial, la consolidación de la tendencia neoliberal y de su núcleo conceptual y operativo fundamental —la soberanía incontrastada del mercado— particularmente en una economía fuertemente oligopólica como la venezolana, sería extremadamente insidiosa, pues, como ha sido ampliamente comprobado, se trata de un ámbito donde los mecanismos de mercado son especialmente inefficientes.

Sin embargo, si las elecciones presidenciales registraron una acentuación de la polarización entre dos candidatos que las ha venido caracterizando durante los últimos procesos, las legislativas —tanto las nacionales como las estadales— presentan novedades que sería erróneo subestimar.

La primera de estas novedades es la pérdida de la mayoría absoluta que durante el período recién concluido mantuvo en el Congreso de la República el partido de gobierno, lo que hacía de aquel poco más que una caja de resonancia de la voluntad política de las más altas instancias de dirección —el llamado cogollo— del segundo. A ello se suma el notable crecimiento de la representación parlamentaria de algunos partidos minoritarios, convertidos en voceros de intereses emergentes específicos tanto territoriales como sociales y que así, a la vez que erosionan el bipartidismo, logran una inédita capacidad para condicionar la acción del gobierno dentro de los límites impuestos por el carácter presidencialista del régimen. Además, este importante cambio en la composición del parlamento está íntimamente relacionado con la que en propiedad es posible considerar como la mayor novedad expresada en estas elecciones: la consolidación de una serie de liderazgos regionales de tipo nuevo, inscritos en un mismo proyecto político nacional pero con notable autonomía, construidos a partir de un trabajo serio, sostenido y a veces riesgoso con las comunidades locales centrado en la atención de las demandas reales de la población más desprotegida. En algunas de las ciudades principales, estos liderazgos pusieron en jaque a las supuestamente omnipotentes maquinarias de los dos partidos tradicionalmente dominantes, de modo que no es en absoluto exagerado suponer que este hecho puede tener consecuencias de enorme trascendencia en la dinámica político-social de los próximos años.

Como es natural, esta situación se expresa con intensidad tal vez mayor en la composición de las nuevas asambleas legislativas de los estados: no sólo el gobierno ha perdido su mayoría en las principales de ellas, sino que en algunas partidos que antes tenían una presencia nula o insignificante adquieren ahora una fuerza decisiva. Esto es de la máxima importancia en vistas a la situación que

a partir de este mismo año se creará con la elección directa de los gobernadores de estado. Por otra parte, es previsible que las novedades de las elecciones de 1988 se reproduzcan ampliadas en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejos municipales de 1989.

En síntesis, es posible adelantar que el proceso de concreción y puesta en práctica de las reformas políticas no sólo se procesará a través de un Congreso más beligerante e independiente del Ejecutivo que en el pasado, sino que además deberá contar con la existencia de poderes regionales y locales cuya misma composición política anuncia un grado de autonomía totalmente desconocido en las administraciones anteriores y cuya legitimidad está fundada en su identificación con las demandas de las comunidades que representan. La fuerza con que en todas las instancias legislativas aparecen las organizaciones políticas emergentes abre una ventanilla de esperanza en relación a la posibilidad de que las reformas se concreten en términos predominantemente progresistas, pero a la vez coloca sobre los hombros de esas mismas organizaciones una enorme responsabilidad, sin duda política pero también técnica y administrativa. Su manejo es lo que en definitiva nos permitirá saber si en verdad nos encontramos en el umbral de un tiempo nuevo o si, por el contrario, estamos solamente frente a una versión remozada de las prácticas clientelistas del viejo populismo.

Es dentro de ese marco, en tantos aspectos inédito y hasta contradictorio, que durante los próximos años deberemos movernos quienes nos ocupamos de las cuestiones territoriales, aunque no sólo nosotros. Y la única certidumbre al respecto es que, definitivamente, las viejas prescripciones, tanto las "progresistas" como las "conservadoras", han perdido toda vigencia y que, como enseña la experiencia, debemos desconfiar de las recetas mágicas, aquellas que, con un solo golpe de la varita, pretenden resolver todos los problemas.

No ignoramos que en períodos de alta incertidumbre como el que ahora se abre, es muy fuerte la tentación de refugiarse en las viejas certezas que, cuando menos, garantizan la paz del espíritu. Sin embargo, esto significaría renunciar a *priori* a entrar en batalla. Por el contrario, hoy más que nunca es necesario poner en discusión, con rigor y sin prevenciones ideológicas, todas las certezas, sean ellas viejas o nuevas, de derecha o de izquierda; así mismo, la velocidad con la que se precipitan los acontecimientos exige colocar en el mismo plano la denuncia y las proposiciones concretas de acción. En estos años podemos estarnos jugando un prolongado futuro, por lo que en ellos no tienen cabida las complacencias personalistas o académicas.

Todo esto nos conduce a insistir en que las páginas de **Urbana** están abiertas para ese debate. Y como se trata de una coyuntura que no es solamente

venezolana sino que abarca todo nuestro continente, nos sentiremos especialmente complacidos si esta invitación es aceptada también por los colegas de los otros países latinoamericanos a fin de poder ampliar el espectro de análisis y propiciar la confrontación de experiencias.

Marco Negrón